

Acusan que nuevo PJ genera desconfianza a CEOs de EU

Ven primeros costos de reforma judicial

Preven desventaja para IP mexicana si se reactiva panel para conflictos

MAYUMI SUZUKI

La decisión de cambiar al Poder Judicial está generando al País los primeros costos con la solicitud de empresas de Estados Unidos de ser protegidas ante “la politización” de la justicia en México.

El senador panista Raymundo Bolaños dijo que los llamados “jueces del Bienestar” no generan confianza y certidumbre a los inversionistas estadounidenses y por eso la Business Roundtable (BRT) pidió a la administración Trump garantizar que no serán víctimas de “caprichos políticos”.

“Tristemente, los empresarios y el sector privado (estadounidense) tienen razón. El hecho de que se pierda la autonomía de uno de los poderes de la Unión, de que se diluya la división de poderes en México y que el Poder Judicial haya dejado de ser ese equilibrio entre los poderes para dirimir controversias, por supuesto que es riesgoso, y es un riesgo que advertimos desde el inicio, desde que se planteó la reforma judicial”, indicó.

Grupo REFORMA publicó ayer que la BRT, que agrupa a unos 200 CEOs como Tim Cook, de Apple; Jamie Dimon, del banco JPMorganChase; Mary Barra, de la automotriz GM, y Raj Subramaniam, de la empresa de envíos FedEx, pidieron además frenar lo que llamaron discriminación del Gobierno mexicano en los sectores de energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería.

También, sugirieron restaurar el Mecanismo de Solución de Disputas Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) en el T-MEC.

Explicó que, al renegociar el tratado comercial, Estados Unidos y Canadá van a solicitar neutralidad de los tribunales mexicanos y hoy, en virtud de la reforma judicial, el Gobierno mexicano no está en posibilidad de garantizar esa imparcialidad.



■ Empresas de Estados Unidos se resisten a mover los servicios de carga al AIFA

Reclamos estadounidenses

Con el argumento de que la Reforma Judicial de México socava el Estado de derecho, líderes de las más influyentes compañías de EU pidieron a la Administración Trump renovar en 2026 el T-MEC.



■ Los inconformes están agrupados en la Business Roundtable (BRT) que congrega a unos 200 CEOs

■ Pidieron frenar lo que llamaron discriminación del Gobierno mexicano en

energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería.

■ Acusan que se favorece a Pemex, a la CFE, a Telmex y a Mexicana.

■ Protestan porque la 4T obligó a empresas extranjeras a tener licencias de correos y protegió al servicio postal mexicano.

■ Reprochan que los servicios de carga ya no se hagan en el AICM.

■ Alegan que se ponen en riesgo los arbitrajes independientes frente a “caprichos políticos”.

Al recordar que la Oposición en el Senado previó durante el proceso de desmantelamiento del viejo Poder Judicial y de los organismos autónomos las quejas estadounidenses, la emecista Alejandra Barrales sostuvo que la petición de los empresarios denota desconfianza en los recientes legislaciones de la Administración Sheinbaum.

“Es una señal de desconfianza, de inconformidad. No debiera ser una sorpresa, ya advertíamos que este tipo de medidas podrían venir derivando de las reformas que vulneran los acuerdos, que trastocan lo convenido”, dijo.

La priista Claudia Anaya

consideró que con la posible reinstauración del ISDS, la Iniciativa Privada en México se encontraría en desventaja ante sus competidores internacionales.

“Lo que estamos generando es un mecanismo de defensa desequilibrado, porque a todos los locales, todo el que no pueda irse a defender a un panel internacional, lo vas a dejar en una condición de desventaja. Entonces, creas un desequilibrio del mercado”, sostuvo.

Por su parte, el senador del PVEM, Waldo Fernández, calificó como “normal” que la iniciativa privada estadounidense externe sus

preocupaciones durante esta etapa, rumbo a la renegociación.

“Van a querer en la negociación mejorar sus condiciones, cosa que es completamente válida”, expuso.

Comentó que México, al encontrarse en la misma etapa, ha detectado barreras no arancelarias que afectan la operación comercial, específicamente vinculadas al acero y aluminio y al requerimiento de que todos los transportistas dominen el inglés.

El senador morenista Saúl Monreal consideró que son “lógicas” inquietudes a lo novedoso de la reforma al Poder Judicial.

Gobierno de México